

Chillán, quince de octubre de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, con fecha veintiséis de agosto del año en curso, comparece don Sergio Pérez Nova, Fiscal Jefe de la Fiscalía Local de Chillán, señalando que en la investigación RUC 2110025640-9, RIT 3816-2021 del Juzgado de Garantía de Chillán, por los delitos de corrupción entre particulares de los artículos 287 bis y 287 ter del Código Penal, el Ministerio Público se encuentra investigando hechos presuntamente constitutivos de los delitos de corrupción entre particulares en los que tendría participación, además de otras personas, el Gobernador Regional de Ñuble don Oscar Manuel Crisóstomo Llanos, reuniéndose en la indagación antecedentes que permiten formalizar la investigación respecto a la mencionada autoridad y requerir medidas cautelares personales a su respecto, lo que hace necesario solicitar se declare ha lugar a la formación de causa, para todos los efectos legales, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 inciso 6° de la Constitución Política de la República, y en los artículos 416, incisos 1° y 2°, y 423, ambos del Código Procesal Penal, autorizándose su desafuero.

Sostiene que el imputado don Oscar Crisóstomo Llanos, luego de dejar el cargo de Director Provincial de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanización de la Provincia de Ñuble, a fines del año 2018, constituyó el 22 de marzo de 2019, junto a su cónyuge doña Carol Uribe González, la sociedad Inmobiliaria Pullay Ltda., convirtiéndose el imputado en su representante legal. La constitución de esta sociedad tenía por finalidad realizar actividades propias de las Entidades de Gestión Rural (EGR), las que consistían en prestar asistencia técnica, jurídica y social a los postulantes de subsidios de habitabilidad rural (destinados a la construcción de viviendas rurales), desarrollando los proyectos respectivos y presentándolos para ser evaluados y aprobados por el Servicio de Vivienda y Urbanismo.

Añade el persecutor, que a principios del año 2019, la sociedad Inmobiliaria Pullay Ltda. no había suscrito el Convenio Regional de Asistencia Técnica con dicho Servicio, el que la habilitaba para obrar como EGR, por lo que el 3 de abril de 2019, el imputado en representación de dicha sociedad, celebró un contrato de prestación de servicios con la Entidad de Gestión Rural Acoge Asesorías, Consultorías Ltda., a través del cual Inmobiliaria Pullay Ltda., se comprometió a realizar, bajo el nombre de Acoge Asesorías, Consultorías Ltda., y en su representación, frente a los beneficiarios de los subsidios y frente al SERVIU, actividades propias de dicha entidad, tales como realizar los levantamientos que permitieran la postulación al subsidio de la vivienda que otorga el Ministerio de



Vivienda y Urbanismo a través de sus programas habitacionales, y conseguir a las empresas constructoras que se encargarán de la ejecución de las obras. Por su parte, la EGR Acoge Asesorías y Consultorías Ltda. se comprometió a pagar por los servicios prestados por la Inmobiliaria Pullay Ltda., el 5% del total de los pagos obtenidos como EGR, en base a cada beneficiario que obtuviera su subsidio habitacional. El contrato se celebró en relación con 17 beneficiarios individuales de las comunas de San Fabián y Cobquecura que ya habían obtenido la adjudicación de sus respectivos subsidios, los que fueron identificados.

En el marco de las gestiones correspondientes a la ejecución de aquel, particularmente lo relacionado con “conseguir a las empresas constructoras que lleven a cabo la ejecución de las obras”, el imputado don Oscar Crisóstomo Llanos, en representación de la sociedad Inmobiliaria Pullay Ltda., y también representando a la EGR Acoge Asesorías y Consultorías Ltda., en virtud del contrato que había celebrado con ella, con fecha 30 de mayo de 2019, celebró un contrato de prestación de servicios con el imputado Diego Felipe Torres Placencia, quien representaba a la sociedad Constructora Firenze Ltda., en el cual la sociedad Inmobiliaria Pullay Ltda. se obligó a “realizar las acciones pertinentes para generar y finalmente lograr la suscripción de contratos de construcción” entre la Constructora Firenze Ltda., la EGR Acoge Asesorías, Consultorías Ltda., y los 17 beneficiarios de subsidios habitacionales de las comunas de Cobquecura y San Fabián señalados en el contrato celebrado entre Inmobiliaria Pullay Ltda. y la EGR Acoge Asesorías, Consultorías Ltda., los que eran asistidos por dicha EGR y que también fueron individualizados en el contrato celebrado con la Constructora Firenze Ltda. Por su parte, la constructora, a cambio, se obligó a pagar a la Inmobiliaria Pullay Ltda. la suma de \$1.350.000 por cada uno de los 17 beneficiarios de subsidios habitacionales individualizados en el contrato, lo que significó una suma total de \$ 22.950.000, pagándose el 50 % de dicho monto -\$ 11.475.000- al momento de la firma del contrato, a través del cheque serie número HJ 0000101, de la cuenta corriente N°70695642 del Banco Santander, acordándose pagar la otra mitad una vez obtenida la calificación definitiva por parte del Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU), cuando se firmara el contrato respectivo y se autorizara a ejecutar las obras correspondientes a la Constructora Firenze Ltda. por parte del SERVIU y de los beneficiarios de los subsidios.

Continúa el compareciente exponiendo que el imputado, actuando en representación de su sociedad Inmobiliaria Pullay Ltda., y, además, en representación de Acoge Asesorías, Consultorías Ltda., empresa esta última que



formalmente oficiaba como EGR frente al SERVIU y a los 17 beneficiarios de subsidios habitacionales, a cambio de una suma de dinero que bordeaba los 23 millones de pesos, favoreció la contratación de la empresa Constructora Firenze Ltda., en desmedro de otros potenciales oferentes, para ejecutar las obras de construcción de las viviendas, afectando con ello la libre competencia, actuando en contra de los intereses de los beneficiarios de los subsidios habitacionales y de potenciales oferentes, entre ellos la empresa constructora Alturas, que había sido convocada también por el imputado Oscar Crisóstomo como oferente en el proceso.

Sostiene el señor Fiscal, que los hechos descritos configuran, respecto del Gobernador Regional de Ñuble, el delito de cohecho pasivo entre particulares del artículo 287 bis del Código Penal, y respecto del imputado don Diego Felipe Torres Placencia, el delito de cohecho activo entre particulares del artículo 287 ter del mismo, correspondiéndole a ambos participación en calidad de autor, encontrándose los delitos en grado de desarrollo consumado.

Agrega que la investigación se inició el 18 de mayo de 2021 a través de una denuncia remitida a la Fiscal Regional de Ñuble doña Nayalet Mansilla por el SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Región de Ñuble don Carlos Urrestarazú Carrión, quien había recibido la información respectiva de manera anónima. Además de recibir otras denuncias relativas a los mismos hechos, con posterioridad, durante el curso de la investigación, el 31 de mayo de 2021, el abogado Juan Maibbe (sic) Cadenas presentó una querella criminal, en conformidad con el artículo 111 inciso 2° del Código Procesal Penal, contra don Oscar Crisóstomo Llanos -y de otras personas- por los mismos hechos señalados, así como también por otros hechos que se encuentran en investigación y que no son parte de la solicitud de desafuero.

Indica que en el marco de la investigación se han recabado antecedentes que permiten, en esta etapa, establecer presunciones fundadas tanto de la existencia de los delitos como de la participación de los imputados, en especial de don Oscar Crisóstomo Llanos, Gobernador Regional de Ñuble.

Como antecedentes fundantes de su pretensión menciona los siguientes: denuncia presentada por el SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Región de Ñuble don Carlos Urrestarazú Carrión, de fecha 18 de mayo de 2021 y documentos fundantes; querella de fecha 31 de mayo de 2021 presentada por el abogado don Juan Maibbe (sic) Cadenas; copia de contrato de prestación de servicios celebrado entre Inmobiliaria Pullay Limitada, representada por el imputado Oscar Crisóstomo Llanos y Acoge Consultorías Limitada, representada



por Mauricio Mora Barrera, de 3 de abril de 2019; copia de contrato de prestación de servicios celebrado entre Inmobiliaria Pullay Limitada, representada por el imputado Oscar Crisóstomo Llanos, y Constructora Firenze Limitada, representada por el imputado Diego Torres Placencia, de 30 de mayo de 2019; copia de Convenio Regional de Asistencia Técnica para Programas Habitacionales (CRAT) celebrado entre SERVIU Bio Bio y Acoge Asesorías y Consultorías Limitada, de 27 de octubre de 2016, copia de Convenio Regional de Asistencia Técnica para Programas Habitacionales (CRAT) celebrado entre SERVIU Ñuble e Inmobiliaria Pullay Limitada, de 31 de julio de 2019; declaración del imputado Diego Felipe Torres Placencia, contenida en Informe Policial N°2566, de 13 de diciembre de 2021 de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI Chillán; declaración de Mauricio Mora Barrera, contenida en Informe Policial N° 2566, de 13 de diciembre de 2021, de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI Chillán; declaración de Roly Francisco Zúñiga Fritz, contenida en Informe Policial N°1564 de 19 de octubre de 2022, de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI Chillán; declaraciones de Alinne Segura, Domingo Sepúlveda, Manuel Matamala, José Navarrete Urra, María Leiva, Sergio Navarrete, Jorge Salgado, Leontina Sánchez, Mercedes Andrade, Juan Guerrero, María Díaz, Bernardita Suazo, José Navarrete Valenzuela y Luis Contreras, todos beneficiarios de subsidios habitacionales atendidos por EGR Acoge a través de Inmobiliaria Pullay, contenidas en Informe Policial N°2566, de 13 de diciembre de 2021, de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI Chillán; copias de contratos de construcción de fecha 9 de agosto de 2019, celebrados entre Acoge Asesorías y Consultorías Ltda., Constructora Firenze Ltda. y los siguientes beneficiarios de subsidios habitacionales: Julia Castillo Maldonado, Leontina Elgueta Sánchez, Manuel Matamala Labrín, María Díaz Contreras, Mercedes Andrade Vega y Sergio Navarrete Valenzuela; y, copias de contratos de construcción, de fecha 20 de junio de 2020, celebrados entre Acoge Asesorías y Consultorías Ltda., Constructora Firenze Ltda. y los siguientes beneficiarios de subsidios habitacionales: Alinne Segura Pinto, Bernardita Suazo Palacios, Domingo Sepúlveda Leiva, Jorge Salgado Suazo, José Navarrete Urra, José Navarrete Valenzuela, Juan Guerrero Vallejos, Juan Sepúlveda Correa, Luis Contreras Rodríguez, Manuel Placencia Henríquez y María Leiva Romero.

En lo concerniente a los fundamentos de derecho, el persecutor cita lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 124 de la Constitución Política de la República, y como norma de fondo alude a la modificación incorporada al Código Penal, por la Ley N°21.121 de 20 de noviembre de 2018, relativa a la llamada corrupción privada, transcribiendo lo dispuesto en los artículos 287 bis y 287 ter.



Agrega que estos tipos penales establecen figuras especiales de cohecho y soborno entre particulares que apuntan, esencialmente, a la protección de la competencia leal en el ámbito de las contrataciones en el mundo privado, castigándose la distorsión de las decisiones de contratación de la empresa mediante el soborno de aquellos que deben decidir al respecto. Se trata de delitos de peligro abstracto, pues la ley no exige ningún efecto pernicioso, siendo los potenciales perjudicados de estas conductas los eventuales oferentes que no se valen de sobornos para obtener su contratación. En efecto, tal como lo señala el profesor Héctor Hernández, a propósito de estas nuevas figuras penales y en particular en relación con la exigencia del tipo penal de que se favorezca o se haya favorecido la contratación con un oferente por sobre otro, en el texto *“Código Penal comentado. Parte Especial. Libro segundo, título VI. Doctrina y jurisprudencia.”*, de abril de 2019, página 188, *“para el cumplimiento de la exigencia debería bastar con la existencia de potenciales oferentes, sin que sea exigible la existencia de ofertas concretas que se vean desplazadas, esto por la sencilla razón de que para los respectivos tipos penales dicha contraprestación es solo ideal o potencial, no requiere ser efectiva”*. Por otra parte, en relación con el sujeto activo del delito de cohecho pasivo del artículo 287 bis (mandatario o empleado), el mismo autor señala que estos conceptos *“pretenden abarcar todas las formas de desempeño laboral o profesional para otro a cuyos intereses se está subordinando”*.

Mas adelante indica el señor Fiscal, que el imputado Oscar Crisóstomo actuó representando los intereses de la EGR Acoge, entidad a la cual, si bien formalmente prestaba servicios conforme lo señalado en el contrato respectivo, en los hechos, actuando como mandatario de dicha empresa para los fines regulados en el contrato respectivo, sin conocimiento de su representante legal, negoció y acordó la contratación de una empresa constructora determinada para ejecución de las obras de construcción en favor de beneficiarios de subsidios habitacionales a las que tenía que atender precisamente dicha EGR, acordando y recibiendo dinero en virtud de aquello, todo lo cual quedó incluso consignado en el contrato firmado entre la Inmobiliaria Pullay Ltda., representada por el imputado Crisóstomo, y la Constructora Firenze, dejando sin posibilidad de que aquellos beneficiarios optaran por otros como potenciales oferentes, tales como las constructoras Cordillera y Alturas, según se desprende de algunas de las declaraciones transcritas.

Enseguida se refiere a las exigencias probatorias para acceder al desafuero solicitado, citando pronunciamientos de la Excelentísima Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones de Temuco, Valparaíso y Santiago, añadiendo que tales



reflexiones son acertadas, pues sería impropio en una etapa preliminar de la investigación, exigir que esté agotada la prueba destinada a acreditar de modo inconcuso tanto los hechos como la participación del imputado. La naturaleza de mera condición de procedibilidad del desafuero no puede reclamar, por muy importante que sea, la demostración plena de una determinada tipicidad o de la participación, y mucho menos, de la culpabilidad.

Postula el compareciente, que los antecedentes puestos a disposición de esta Corte deben ser apreciados teniendo en consideración que la solicitud de desafuero en el actual estado de la investigación se realiza para que el Ministerio Público pueda solicitar medidas cautelares personales una vez ejecutoriada la sentencia que lo acoja y luego de formalizada la investigación respecto del imputado.

Finalmente, solicita hacer lugar a la formación de causa en contra del Gobernador Regional de Ñuble don Oscar Manuel Crisóstomo Llanos, en razón de la participación criminal que le cabe, en calidad de autor, en los hechos descritos en esta presentación, los que configuran el delito de corrupción entre particulares del artículo 287 bis del Código Penal.

Segundo: Que, el doce de septiembre pasado, evacuando el traslado conferido, comparece el abogado don Enrique Aldunate Esquivel, mandatario judicial de don Oscar Manuel Crisóstomo Llanos, solicitando el rechazo de la solicitud formulada por el Ministerio Público por cuanto el requerimiento no satisface el estándar mínimo de plausibilidad para la procedencia del desafuero, lo que supone un convencimiento mínimo del éxito de la imputación penal.

A continuación, cita pronunciamientos en causas por desafuero emitidos por las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel, agregando que resulta evidente que el examen debe vincularse a lo establecido en el artículo 140 del Código Procesal Penal, en contexto de un debate de medidas cautelares, acreditando sus presupuestos.

Entonces, conforme a la letra a) de la citada norma, deben concurrir antecedentes que justifiquen la existencia del delito que se investiga. Es decir, los antecedentes deben satisfacer todos los elementos del delito y no sólo una referencia a la tipicidad, también a la antijuridicidad (Maturana, Montero. Derecho Procesal Penal, T. I P. 659). En la especie, no se satisfacen las exigencias de tipicidad objetiva y subjetiva, así como también, la inexistencia de lesión al bien jurídico protegido.

En cuanto al requisito previsto en la letra b) del citado artículo 140, se requiere que existan antecedentes que permitieren presumir fundadamente que el



imputado ha tenido participación en el delito como autor, cómplice o encubridor. Es decir, se trata del juicio lógico de probabilidad, entre la duda y la convicción, para estimar la participación, (cf. Horvitz, López. Derecho Procesal Penal; Maturana, Montero. T. I P. 660). En esta perspectiva, no resulta lógico atribuir autoría a su representado, si los antecedentes sólo demuestran que resulta inverosímil cometer el delito contra su propio interés por ser socio y dueño de la empresa Pullay, y menos, por afectar la *libre competencia* como sugiere -erradamente- el Ministerio Público en su escrito de desafuero. Los antecedentes, son tergiversados y confunden los alcances del tipo penal que le sirve de fundamento.

Más adelante sostiene que existe déficit en el núcleo fáctico de la imputación contenida en la solicitud de desafuero. Alega ausencia de tipicidad, ya que siendo la conducta imputada el art. 287 bis del Código Penal, es decir, el delito de corrupción privada, o cohecho pasivo del particular, la tipicidad en cuanto a los presupuestos de los elementos del injusto, en el ámbito del tipo objetivo, supone la concurrencia de todos sus elementos, sean descriptivos (susceptibles de ser captados por los sentidos) o normativos (los que deben ser captados y comprendidos subjetivamente puesto que conllevan un juicio de valor).

Añade que, al decir de la propia doctrina que cita parcialmente el Ministerio Público, “lo normal será que solo existan razones para el soborno de un empleado o mandatario en contextos de contrataciones significativas en términos de volumen y/o valor, y eso por lo general solo será el caso respecto de empresas o instituciones de cierta envergadura. No es sujeto activo el principal o dueño” (Couso, Jaime. Hernandez Héctor. Código Penal Comentado, Parte Especial; p. 188). Se trata entonces, de un caso de atipicidad, pues, cuando una determinada conducta no encuadra en ninguno de los tipos concretamente previstos en la ley, falta la tipicidad y de antemano sabemos que por injusta que ella sea o por reprochable que sea su agente, no será posible derivar de ella una responsabilidad penal [...] se comprende dentro del concepto de ausencia de tipicidad (atipicidad) aquellos en que un hecho concreto no reúne todos los elementos de un tipo descrito legalmente” (Novoa Monreal, Eduardo. Curso de Derecho Penal Chileno. Reimpresión 3ª edición, Editorial Jurídica de Chile, 2009: p. 308).

Asimismo, sostiene el letrado, el de marras se trata de un caso de ausencia de antijuricidad, pues, el delito de corrupción privada o cohecho entre privados supone la afectación de la competencia leal, es decir, el tipo penal está “centrado en los intereses de la empresa (o de su titular) en la que se desempeña el sujeto sobornado, sean estos de carácter específicamente patrimonial, sea que estén



concebidos con mayor amplitud, dando lugar a un tipo de deslealtad hacia la propia empresa (o su titular).” Cita la sentencia del Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, en causa RUC N°2000099289-6, RIT 309-2023.

Continúa refutando los hechos en que se funda la solicitud de desafuero, esgrimiendo que, la prueba aportada por el Ministerio Público resulta contradictoria con sus propias afirmaciones contenidas en la solicitud de desafuero, sin perjuicio, que su parte cuenta con abundante prueba de descargo, entre otros, copia del contrato de prestación de servicios entre Inmobiliaria Pullay con empresa Acoge Consultoría Limitada de fecha 3 de abril de 2019; contrato de prestación de servicios entre Inmobiliaria Pullay con empresa constructora Firenze Ltda. de fecha 30 de mayo de 2019; Resolución Exenta N°1431 de 13 de agosto de 2024 que pone término al procedimiento administrativo sancionador, que no aplica sanción a Inmobiliaria Pullay Ltda., ni a Acoge Asesorías y Consultorías Ltda., sin que existan antecedentes de algún beneficiario de subsidios perjudicado; y copia de Resolución del Seremi de Vivienda de Ñuble, de fecha 24 de julio de 2024, que descarta infracciones por parte de la empresa de su representado. Todo lo anterior, ratifica la inexistencia de antecedentes que permitan sostener la solicitud, ni menos, subsumir la conducta en el tipo penal atribuido a su representado.

Sostiene que hay imposibilidad de convencimiento mínimo del éxito de la imputación, ello ante la existencia de una causal de extinción de responsabilidad penal de conformidad con el artículo 93 del Código Penal en relación con el artículo 250 letra d) del Código Procesal Penal, pues la responsabilidad penal de su representado se encuentra extinguida por prescripción de la acción penal, toda vez que se le imputa un ilícito con pena de simple delito, en relación a la fecha de la querella, respecto de los cuales ha transcurrido en exceso el plazo de 5 años establecido por la ley penal (artículo 94 del Código Penal), sin que pueda invocarse por los acusadores la suspensión de la prescripción prevista por el artículo 96 del Código Penal, toda vez que se ha paralizado la prosecución del procedimiento por más de tres años, conforme a lo previsto en la parte final del mismo artículo.

Explica que la paralización del procedimiento se ha producido en este caso desde la fecha en que, conforme al Código Penal, “el procedimiento se sigue contra el culpable”, es decir, el día 31 de mayo de 2021, con la resolución que declaró admisible la querella. Es decir, la causa ha permanecido paralizada 3 años, 2 meses y 29 días, satisfaciendo la exigencia de la parte final del art. 96 del Código Penal. Consecuencia de lo anterior, es que han transcurrido exactamente 5 años y tres meses, desde el hecho atribuido en la querella y en la solicitud de



formalización (29 de agosto 2024). Cita jurisprudencia atinente a la prescripción aludida.

Finalmente, solicita el total y absoluto rechazo de la solicitud de desafuero, con expresa condena en costas.

En presentación incorporada a folio 18 de la carpeta de tramitación digital, el abogado señor Aldunate Esquivel, acompañó copia de la Resolución Exenta N°1431 de 13 de agosto de 2024, copia de escritura de modificación de Inmobiliaria Pullay Limitada de 8 de febrero de 2021 y copia de boletas de honorarios de don Oscar Crisóstomo por asesoría técnica.

Tercero: Que, con fecha veinticinco de septiembre pasado se llevó a efecto la vista de la causa ante el Tribunal Pleno, interviniendo por el Ministerio Público el abogado asesor jefe de la Fiscalía Regional de Ñuble, don Francisco Soto Donoso, y el abogado señor Enrique Aldunate Esquivel, mandatario del señor Gobernador Regional de Ñuble.

Cuarto: Que, para resolver la pretensión del ente persecutor, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 124 de la Constitución Política de la República, norma según la cual *“Ningún gobernador regional, delegado presidencial regional o delegado presidencial provincial, desde el día de su elección o designación, según el caso, puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a la formación de causa. De esta resolución podrá apelarse ante la Corte Suprema.”*

Por su parte, el Título IV del Código Procesal Penal, establece el procedimiento relativo a personas que gozan de fuero constitucional, disponiendo el artículo 423 que el procedimiento establecido en el Párrafo 1° de dicho Título es aplicable a los casos de desafuero de gobernadores regionales, delegados presidenciales regionales o delegados presidenciales provinciales, en lo que fuere pertinente.

De tal manera que acorde a lo prescrito en el artículo 416 del aludido código procedimental, corresponde a esta Corte de Apelaciones decidir si hace lugar a la formación de causa, si hallare mérito al efecto.

Quinto: Que, de lo dicho se colige que este Tribunal podrá decretar el desafuero del señor Gobernador de la Región de Ñuble, en la medida que hallare mérito al efecto, lo que implica establecer un juicio acerca de la plausibilidad de la imputación formulada en su contra por el Ministerio Público, en relación al delito previsto y sancionado en el artículo 287 bis del Código Penal.



Sexto: Que, acorde a los principios inspiradores del proceso penal, teniendo en cuenta la normativa citada, la jurisprudencia existente en la materia, y lo expuesto en estrados tanto por el persecutor como por el apoderado del señor Crisóstomo Llanos, la ponderación que corresponde efectuar a estos sentenciadores, debe sujetarse a los parámetros que contempla el artículo 140 del Código Procesal Penal para el otorgamiento de medidas cautelares. A dicha conclusión se arriba, atendido lo establecido en el inciso segundo del artículo 416 del mismo Código, al señalar que *“Igual declaración requerirá si, durante la investigación, el fiscal quisiere solicitar al juez de garantía la prisión preventiva del aforado u otra medida cautelar en su contra.”*

De lo dicho, entonces, resulta que el Ministerio Público tiene la carga de aportar antecedentes que, por una parte, justifiquen la existencia del delito investigado, y además, permitan presumir fundadamente que el aludido Gobernador Regional ha tenido en tal ilícito participación en calidad de autor.

Séptimo: Que, también conviene mencionar que el estándar requerido no puede ser igual al de una sentencia definitiva condenatoria, el cual requiere al tenor del artículo 340 del Código Procesal Penal, que lo jueces formen convicción más allá de toda duda razonable, de la existencia del delito y de la participación que le corresponde al imputado.

Octavo: Que, el análisis que corresponde efectuar a este Tribunal se circunscribe a los antecedentes allegados por el señor Fiscal en su solicitud de desafuero y a aquellos acompañados por el representante del señor Crisóstomo Llanos, referidos respectivamente en los motivos Primero y Segundo de esta resolución.

Noveno: Que, previo a iniciar el análisis de los antecedentes, se estima pertinente precisar que en esta causa no se atribuyen al señor Gobernador Regional hechos cometidos en el ejercicio de su cargo, ni durante el periodo que ha ejercido tales funciones, sino que el contexto fáctico aludido por el ente persecutor se sitúa temporalmente previo a dicha investidura.

Décimo: Que, el delito cuya autoría se imputa al señor Crisóstomo Llanos se encuentra consagrado en el artículo 287 bis del Código Penal, norma incorporada por la Ley N°21.121, publicada en el Diario Oficial el 20 de noviembre de 2018, cuyo texto vigente a la época de los hechos materia de la solicitud en análisis, es el siguiente: *“El empleado o mandatario que solicitare o aceptare recibir un beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o un tercero, para favorecer o por haber favorecido en el ejercicio de sus labores la contratación con un oferente sobre otro será sancionado con la pena de reclusión menor en su*



grado medio y multa del tanto al duplo del beneficio solicitado o aceptado. Si el beneficio fuere de naturaleza distinta de la económica, la multa será de cincuenta a quinientas unidades tributarias mensuales.”

Undécimo: Que, conforme a la historia de la Ley N°21.121 (disponible en <https://www.bcn.cl/historiadelaley/>), aquella tiene su origen en una moción de los Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Espina, Harboe y Larraín, con la que inician un proyecto que modifica el Código Penal, siendo su idea matriz o fundamental, aumentar las sanciones que el Código Penal establece para los delitos de cohecho y soborno a funcionarios públicos nacionales o extranjeros, tipificar y castigar los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal, y elevar las penas de los delitos de cohecho y soborno considerados en la Ley que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

Para contextualizar la revisión del presente requerimiento, resulta útil mencionar que en el Informe de Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados de 04 de octubre de 2017, se consigna que el abogado Jefe de Delitos Económicos y Medioambientales del Ministerio Público, señor Andrés Salazar, expresó que el proyecto con la indicación del Ejecutivo constituye una mejora sustancial respecto de los estándares en materia de derecho penal económico, ya que se hace cargo de vacíos legislativos muy graves, sobre todo en el ámbito de la administración desleal del patrimonio ajeno.

En materia de corrupción entre particulares, destacó que el proyecto agrupe en un título especial del Código Penal a los artículos 287 bis y 287 ter, lo que significa recoger los delitos de corrupción entre particulares en su propia especificidad, es decir, personas que administran patrimonio ajeno y que en base a actos de corrupción privada perjudican ese interés privado, pero también social tratándose de sociedades anónimas como las AFP. Explicó que dichas normas recogen dos conductas distintas: la primera, más común, viene dada por aquel sujeto que está contratado por la empresa que administra el patrimonio ajeno y que es corrompido por la oferta de otro; y, la segunda, por aquel sujeto que inicia la corrupción defraudando tanto al empresario como a los competidores que se acercan al proceso de licitación. Hizo presente el profesional, que es necesaria la división por materias de penalidad, ya que se considera más grave la actitud de quien infringe los deberes que le han sido impuestos por la vía del contrato o la convención, por lo que recomendó mantener el texto original redactado por la Cámara de Diputados respecto del 287 bis, lo que permitirá al juez ponderar cuánto afectó los intereses públicos la acción corruptora de la empresa y de ese funcionario en particular.



Duodécimo: Que, hecha la referencia a la génesis de la norma en la cual el señor Fiscal funda su pretensión, se dirá que según se consigna expresamente en la solicitud en estudio, al actual Gobernador Regional, se le atribuye la calidad de autor del delito de cohecho pasivo entre particulares del artículo 287 bis del Código Penal, hipótesis en cuyo análisis se centrará este tribunal, ello por cuanto, el delito de cohecho activo entre particulares del artículo 287 ter del código punitivo, se atribuye a don Diego Felipe Torres Placencia, persona ajena a la decisión procesal radicada en esta sede.

Décimo Tercero: Que, la figura en análisis corresponde a una de peligro abstracto y el bien jurídico protegido dice relación con la competencia leal o la represión de la competencia desleal, lo que según consignan los autores Jaime Couso Salas y Héctor Hernández Basualto, en el libro Código Penal Comentado. Parte Especial Libro Segundo Doctrina y Jurisprudencia Título VI. 1° edición abril 2019, Legal Publishing Chile, página 188, *“significa que lo que se castiga es la distorsión de las decisiones de contratación de la empresa mediante el soborno de aquellos que deben decidir al respecto.”*

En cuanto al sujeto activo, la norma lo circunscribe al empleado o mandatario, cuya conducta debe consistir en solicitar o aceptar recibir un beneficio económico o de otra índole, para sí o un tercero, con la finalidad de favorecer o haber favorecido en el ejercicio de sus labores la contratación con un oferente sobre otro, sin que sea exigible que se trate de ofertas concretas, sino que quedan comprendidas aquellas con un carácter potencial.

Tal conducta supone necesariamente un destinatario, teniendo tal calidad aquel interesado en que se favorezca la contratación propiciada por el sujeto activo.

Finalmente, en cuanto al aspecto subjetivo, fluye de la norma que se exige en el agente una actuación dolosa.

Décimo Cuarto: Que, en cuanto a jurisprudencia atinente al ilícito en cuestión, resulta ilustrativo citar lo razonado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en el basamento Trigésimo de la sentencia de fecha 29 de enero de 2024, dictada en causa Rol N° 6310-2023, esto es:

“Que, a su vez, estas figuras penales encuentran un correlato, en cuanto se refiere a los verbos rectores, con aquellos que se describen en el delito de cohecho, tanto activo como pasivo. Así, por un lado se sanciona en el artículo 287 bis citado a quien “solicitar” o “acceptare recibir” un beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o un tercero, y por otra parte en el artículo siguiente, al que



“diere”, “ofreciere” o “consintiere en dar” tales beneficios al empleado o mandatario en idéntica forma que lo señala la primera norma.

Otro punto que amerita sea despejado dice relación con el elemento “beneficio económico o de otra naturaleza”. Al efecto dice Dannecker que un “beneficio” a que alude la norma debe ser entendido como una ventaja o mejora objetiva que no se identifica necesariamente con una situación económica, jurídica o personal del receptor del soborno o de un tercero. (Gerhard Dannecker “StGB § 299 Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr”, en Urs Kindhäuser, Ulfrid Neumann y Hans-Ullrich Paeffgen [editores], Nomos Kommentar Strafgesetzbuch, (5. Auflage), Nomos, edición digital, 2016, p. 110). Por su parte, cuando el legislador habla de beneficios de “otra naturaleza” se entiende que se sitúa en un amplio espectro de posibilidades que, como sea, tendrán que ser valoradas objetivamente, a fin de determinar si pueden ser consideradas como un privilegio, en los términos que la norma alude. Con todo, explica Artaza que “[...] resulta evidente que no puede sostenerse una interpretación extensiva, ya que del sentido literal posible se ampliaría el campo de aplicación a supuestos absolutamente permitidos. Por definición, en los negocios se termina favoreciendo a un oferente por sobre otro en atención al beneficio que este último ofrece, por lo que es evidente que el tipo penal, aunque no ocupe el término en forma expresa, se está refiriendo a beneficios “ilícitos” o, más bien, a aquellos a los cuales el empleado o mandatario no tiene derecho y aquellos que no se consideran como permitidos para la toma de decisiones en la contratación de bienes y servicios [...] Al igual como para el delito de cohecho, el tipo penal debe entenderse restringido a los supuestos en que el beneficio solicitado o aceptado sea de aquellos a los cuales no se tiene derecho. Por tanto, deben excluirse inmediatamente todos aquellos que, en el contexto del negocio respectivo, se consideren parte de este como, por ejemplo, comisiones incluidas dentro de los términos del contrato [...] Como se puede apreciar, aquello que abiertamente se incluye dentro del contrato respectivo o ciertas prácticas legítimas para captar clientes, no pueden ser entendidas, a su vez, como un supuesto de soborno. Para tales efectos, resultan sumamente útiles las valoraciones que provengan de la competencia leal” (Op. Cit. pp. 184-185).”

Décimo Quinto: Que, por otra parte, y con la finalidad de comprender cabalmente el contexto fáctico y normativo en cual habría tenido lugar la conducta atribuida al señor Crisóstomo Llanos, debe aludirse a la regulación que establece el Decreto N°10 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado en el Diario Oficial el 21 de octubre de 2015 (última versión 21 de junio de 2017) que Reglamenta el Programa de Habitabilidad Rural.



Según prescribe el artículo 1° en su inciso primero, el Programa regulado por dicho reglamento, denominado Programa de Habitabilidad Rural, tiene por objeto mejorar las condiciones de habitabilidad de familias que residan en cualquier lugar del territorio nacional, excluidas las localidades urbanas de 5.000 o más habitantes de acuerdo a los datos que provea el Instituto Nacional de Estadísticas, atendiendo a sus particularidades geográficas y culturales. Añade que, tratándose de áreas rurales, deberá cumplirse con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, cuando corresponda.

Dentro de las definiciones que contempla el artículo 2°, se reseñarán las siguientes:

2.5. Convenio Marco: Convenio que deben suscribir las Entidades de Gestión Rural con la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, SEREMI MINVU, de la región correspondiente, con el objeto de realizar las respectivas labores de asistencia técnica, desarrollo y presentación de proyectos en el contexto del presente Programa.

2.7. Entidad de Gestión Rural: Persona natural o jurídica, pública o privada, con o sin fines de lucro, cuyo objetivo es prestar Asistencia Técnica a los postulantes, desarrollando los proyectos contemplados en este Programa y presentarlos para ser aprobados por el SERVIU correspondiente.

2.19. Subsidio de Habitabilidad o Subsidio: Es una ayuda estatal directa, que se otorga al beneficiario, sin cargo de restitución por parte de éste, y que constituye un complemento del ahorro, de los aportes adicionales y del crédito hipotecario, cuando corresponda, que deberá tener el beneficiario para financiar la ejecución del proyecto aprobado.

A fin de no reproducir la detallada reglamentación técnica que regula la norma reseñada, en lo que interesa a la presente causa, se dirá que en el Párrafo II: De los Antecedentes para la Presentación de Proyectos y su Evaluación, los artículos 52 y siguientes describen pormenorizadamente las exigencias que deben cumplir los proyectos que la EGR presentan al SERVIU, estableciendo más adelante el artículo 54, que las labores de acompañamiento social y técnico serán de plena responsabilidad de la Entidad de Gestión Rural, contemplándose expresamente entre otras funciones, las siguientes: letra d) *“elaborar el diseño y preparar los proyectos de arquitectura e ingeniería, incluyendo los proyectos de loteo, urbanización, construcción, mejoramiento y/o ampliación de viviendas, regularización, equipamiento y, en general, todos los antecedentes y permisos necesarios para la evaluación y ejecución del proyecto. Los proyectos deberán ser*



conocidos y aprobados por las familias mediante un proceso participativo debidamente acreditado”; letra e) “contratar las obras, incluyendo la supervisión del contrato con el objeto de que se lleve a efecto en todos sus términos, culminando con la entrega a los beneficiarios de las obras terminadas y recepcionadas por la DOM”; y, letra h) “tramitar la recepción de las obras de construcción y urbanización ante la DOM y los organismos o instituciones competentes, cuando corresponda.”

Mas adelante, el Capítulo VI, contiene las normas relativas al Contrato y Ejecución de obras, dentro de las cuales resulta útil consignar que el artículo 55, dispone expresamente que *“El contratista o constructor deberá contar con inscripción vigente para la región respectiva en el Registro Nacional de Constructores de Viviendas Sociales, Modalidad Privada, o en el Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, regulados por el DS N° 63 (V. y U.), de 1997, y por el DS N° 127 (V. y U.), de 1977, ambos de Vivienda y Urbanismo, respectivamente, lo que será verificado por el SERVIU directamente en el Registro respectivo. Este requisito no será exigible a los constructores personas jurídicas integradas por sociedades en que a lo menos uno de sus socios cuente con inscripción vigente en alguno de esos registros, lo que deberá acreditarse por los interesados con copia de los instrumentos públicos correspondientes.”*

En cuanto a las exigencias para que los involucrados reciban el pago de las obras, el inciso segundo del artículo 68, establece que el SERVIU pagará el subsidio, incluidos todos los subsidios complementarios que correspondan, cuando las viviendas se encuentren con Recepción Definitiva de Obras de Edificación por parte de la DOM e inscritas en el Conservador de Bienes Raíces a nombre del beneficiario, deducido el monto de los giros efectuados por concepto de anticipos a cuenta del pago de éste, si existen, contra la presentación de los documentos que se detallan.

Décimo Sexto: Que, la documentación allegada por el Ministerio Público permite tener por asentados los siguientes hechos:

1.- Con fecha 27 de octubre de 2016 la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región del Bio Bio, representada por el Secretario Regional Ministerial don Jaime Arévalo Núñez y la entidad Acoge Asesorías y Consultorías Limitada, nombre de fantasía “ACOGES LTDA”, RUT N°76.556.762-9, representada por don Mauricio Mora Barrera, suscriben Convenio Regional de Asistencia Técnica para Programas Habitacionales (CRAT), cuyo objeto es que la entidad -ACOGES LTDA- desarrolle y ejecute proyectos habitacionales, de



habitabilidad y/o técnicos para las familias objeto de los programas que lleva a cabo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

2.- El 3 de abril de 2019, Inmobiliaria Pullay Ltda., RUT N°76.993.585-1, representada legalmente por don Oscar Crisóstomo Llanos y Acoge Asesorías, Consultorías Ltda., RUT N°76.556.762-9, representada por don Mauricio Mora Barrera, suscriben un Contrato de Prestación de Servicios, en virtud del cual, según se lee en la cláusula segunda, Inmobiliaria Pullay Ltda., en su calidad de prestadora, se obliga a realizar los levantamientos que permitan la postulación al subsidio de la vivienda que otorga el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de sus programas habitacionales, asumiendo la responsabilidad por los resultados de la gestión de los levantamientos, tanto ante los organismos públicos como privados. Asimismo, asume la responsabilidad de conseguir a las empresas constructoras que lleven a cabo la ejecución de las obras.

En la cláusula tercera se identifican los levantamientos correspondientes a 17 beneficiarios individuales adjudicados y 9 beneficiarios individuales aprobados.

En la cláusula cuarta se establece que Acoge Asesorías, Consultorías Ltda., será el único responsable ante el MINVU, llevando adelante el proceso de postulación y aprobaciones del proyecto en general.

Según lo estipulado en la cláusula quinta, Acoge Asesorías, Consultorías Ltda., se obliga a pagar por los servicios prestados el 5% del total de los pagos obtenidos como entidad patrocinante, en base a cada beneficiario que obtenga su subsidio habitacional. Se acordó, que dicha suma sería efectivamente pagada al momento de ser pagado el cupón de elaboración de proyectos técnicos y contratación de obras.

El plazo de ejecución del servicio se pactó en dos años a contar de la fecha del contrato.

3.- Con fecha 30 de mayo de 2019, Inmobiliaria Pullay Ltda., RUT N°76.993.585-1, representada legalmente por don Oscar Crisóstomo Llanos y Constructora Firenze Ltda., RUT N°76.312.321-9, representada por don Diego Torres Placencia, suscriben un Contrato de Prestación de Servicios, en virtud del cual la primera se obliga a realizar las acciones pertinentes para generar y finalmente lograr la suscripción de los contratos de construcción entre la Constructora Firenze, la EGR Acoge y los 17 beneficiarios individuales adjudicados asistidos por la referida EGR.

La inmobiliaria se obliga a obtener la calificación definitiva del proyecto de construcción de los 17 beneficiarios de subsidio habitacional por parte de las áreas técnicas, administrativas, sociales y jurídicas del Servicio de Vivienda y Urbanismo respectivo.



En la cláusula cuarta, se conviene que Constructora Firenze será la responsable ante el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la construcción y apoyo al desarrollo de los proyectos en el área técnica, no existiendo cobro ni compensaciones económicas de parte de los beneficiarios ni de la EGR.

Según lo estipulado en la cláusula quinta, Constructora Firenze Limitada se obligó a pagar por los servicios la suma de \$1.350.000, impuesto incluido, por cada uno de los 17 beneficiarios individualizados, lo que significa una suma total a pagar de \$22.950.000, en dos cuotas de \$11.475.000, cada una: la primera al momento de firmarse el contrato, y la otra al momento de obtenerse la calificación definitiva de los proyectos de construcción por parte del Servicio de Vivienda y Urbanismo y, expresamente, cuando se firme el contrato respectivo y se dé por aceptada y autorizada a ejecutar las obras correspondientes la constructora Firenze Ltda. por parte del SERVIU correspondiente y de los beneficiarios de los subsidios señalados en el contrato. En dicho acto la Inmobiliaria declara recibir un cheque de la Constructora por \$11.475.00 equivalente al 50% de los servicios.

4.- Las 17 personas beneficiarias individuales de subsidios habitacionales que se consignan en los contratos detallados en los N° 2 y 3 precedentes, suscribieron ante Notario Público y en las fechas que se indican, contratos de construcción de vivienda con la Constructora Firenze Ltda., representada por Diego Torres Placencia, compareciendo en dicho instrumento como Entidad de Gestión Rural Acoge Asesorías y Consultorías Ltda., representada en algunos de ellos por Mauricio Mora Barrera y en otros por Leonardo Mora Barrera.

El 9 de agosto de 2019, se suscriben los contratos de construcción de las viviendas de: 1) Manuel Matamala Labrín, 2) Sergio Navarrete Valenzuela, 3) Julia Castillo Maldonado, 4) Leontina Elgueta Sánchez, 5) Mercedes Andrade Vega y 6) Maria Díaz Contreras.

El 20 de junio de 2020, se suscriben los contratos de construcción de las viviendas de: 7) Alinne Segura Pinto, 8) Domingo Sepúlveda Leiva, 9) María Leiva Romero, 10) Jorge Salgado Suazo, 11) Manuel Placencia Henríquez, 12) Juan Sepúlveda Correa, 13) Juan Guerrero Vallejos, 14) José Navarrete Urra, 15) Luis Contreras Rodríguez.

El 1 de julio de 2020, se suscribe el contrato de construcción de la vivienda de 16) Bernardita Suazo Palacios.

El 20 de julio de 2020, se suscribe el contrato de construcción de la vivienda de 17) José Navarrete Valenzuela.

5.- Con fecha 31 de julio de 2019 la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Ñuble, representada por el Secretario Regional Ministerial don Carlos Urrestarazu Carrión e Inmobiliaria Pullay Ltda., RUT



N°76.993.585-1, representada legalmente por don Oscar Crisóstomo Llanos, suscriben Convenio Regional de Asistencia Técnica para Programas Habitacionales (CRAT), cuyo objeto es que la entidad - Inmobiliaria Pullay Ltda.- desarrolle y ejecute proyectos habitacionales, de habitabilidad y/o técnicos para las familias objeto de los programas que lleva a cabo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Décimo Séptimo: Que, de los demás antecedentes en los cuales el señor Fiscal apoya su pretensión, aparece que el Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Ñuble, don Carlos Urrestarazu Carrión, con fecha 18 de mayo de 2021, remitió a la señora Fiscal Regional una denuncia anónima recibida en la Oficinas de Partes del SERVIU el 26 de abril de 2021, contra Inmobiliaria Pullay Ltda., relativa a hechos ocurridos en la época en que don Oscar Crisóstomo Llanos era el representante legal de dicha empresa y previos a la suscripción del Convenio Regional de Asistencia Técnica (CRAT) para Programas Habitacionales con la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Región de Ñuble, imputando que existen antecedentes que dan cuenta de "una *actividad como corredor de subsidios habitacionales*" que el denunciante califica como expresamente ilegal.

En cuanto a la querrella de fecha 31 de mayo de 2021 presentada por el abogado don Juan Maibee Cadenas, debe decirse que el letrado comparece "*de conformidad a lo establecido en el artículo 111 inciso 2° del Código Procesal Penal por hechos punibles cometidos en la anterior Provincia y actual Región de Ñuble que constituyen delitos cometidos por funcionarios públicos que afectaron derechos de las personas garantizados por la Constitución Política de la República y que de igual forma afectaron la PROBIDAD PÚBLICA.*"

En el texto del libelo se individualizan como querelladas nueve personas, una de ellas el señor Crisóstomo Llanos. Luego se describe una serie de hechos, comenzando por algunos que habrían tenido lugar entre junio del año 2014 al 22 de mayo del año 2018. Mas adelante se refiere a la creación de Inmobiliaria Pullay Ltda., el 22 de marzo de 2019, y detalla los contratos de prestación de servicios suscritos por dicha persona jurídica el 3 de abril de 2019 y el 30 de mayo de 2019, ambos reseñados en el basamento previo.

Continúa el querellante narrando antecedentes de una demanda laboral presentada por don Roly Zúñiga Fritz contra Inmobiliaria Pullay Ltda.

En los aspectos finales de la exposición fáctica, el letrado menciona que el 8 de febrero de 2021, se modifica Inmobiliaria Pullay Ltda., retirándose de ella el señor Crisóstomo Llanos, refiriéndose enseguida a una situación vinculada a la EGIS Renacer Limitada.



En cuanto al derecho, en el libelo se mencionan normas constitucionales, administrativas -generales y sectoriales-, tributarias y penales, dentro de las cuales no se incluye el artículo 287 bis del Código Penal.

Por otra parte, en las declaraciones policiales de Diego Torres Placencia y Mauricio Mora Barrera, de fecha 19 de octubre de 2021 y 2 de noviembre de 2021, respectivamente, cada uno explica los motivos que tuvo para suscribir el respectivo contrato de prestación de servicios con Inmobiliaria Pullay Limitada el año 2019. Expresan que a los postulantes al subsidio no se les pidió dinero para ayudarlos en su postulación, que las casas vinculadas a los subsidios se encuentran construidas y con la recepción Municipal y del SERVIU, quedando pendiente solo una por una situación familiar del beneficiario que dice relación con el estudio de títulos.

En cuanto a la elección de Constructora Firenze por parte de los beneficiarios de los subsidios habitacionales, Mora Barrera, representante de la EGR Acoge, señala que él ubicó a Firenze y Alturas, que los beneficiarios conocían el trabajo de Firenze porque habían realizado construcciones en el sector y les daba confianza, optando por esa empresa en una reunión cuyas actas fueron entregadas al SERVIU. Precisa, que tanto Firenze como Alturas expusieron sus maquetas y el proyecto de vivienda que tenían, explicando el metraje y la materialidad. Explica que, el contrato de servicios que suscribió con Inmobiliaria Pullay Limitada, lo fue por un servicio técnico relativo al levantamiento en terreno el cual debían realizar y estaban sobrepasados con trabajo. Indica que a la fecha de su declaración policial -2 de noviembre de 2021- no le había efectuado ningún pago a la Inmobiliaria. Expresa desconocer el contrato entre Inmobiliaria Pullay y Constructora Firenze.

Respecto de Roly Zúñiga Fritz, cuya declaración policial data del 1 de abril de 2022, éste narra las circunstancias en que debido a su conocimiento personal y trabajo desarrollado con el señor Crisóstomo Llanos, tomó contacto con las personas de EGR Acoge en el año 2018 -previo a la constitución de Inmobiliaria Pullay-, realizando actividades en terreno. En relación a los 17 beneficiarios de Cobquecura y San Fabián, manifiesta que antes estaban trabajando con una constructora de nombre Cordillera, con la cual no se concretó la construcción por problemas de incumplimientos, ante los cuales incluso intervino la Municipalidad.

En cuanto a la intervención de las constructoras, dijo que el señor Crisóstomo Llanos, primero conversó con los representantes de la constructora Toscana, quienes son los padres de Diego Torres Placencia, representante de Firenze. Además de Toscana y Firenze no recuerda qué otras constructoras se presentaron a las familias, sin perjuicio, de mencionar que Mauricio Mora conoce



la constructora Alturas, porque está ubicada en el mismo edificio que la EGR Acoge. Afirma haber asistido a una reunión en que a las familias se les presentó el modelo de casa de la constructora Toscana.

En lo concerniente a los testimonios de los beneficiarios de los subsidios habitacionales, cabe anotar que el señor Fiscal acompañó la declaración prestada el año 2021 ante la Policía de Investigaciones por las siguientes personas: Alinne Segura Pinto, Domingo Sepúlveda Leiva, Manuel Matamala Labrín, José Navarrete Urra, María Leiva Romero, Sergio Navarrete Valenzuela, Jorge Salgado Suazo, Leontina Elgueta Sánchez, Mercedes Andrade Vega, Juan Guerrero Vallejos, María Díaz Contreras, Bernardita Suazo, José Navarrete Valenzuela y Luis Contreras Rodríguez.

En lo medular, las personas mencionadas narran su proceso de postulación al subsidio habitacional, refiriendo las gestiones realizadas por la EGIS Acoge, identificando y describiendo la intervención que tuvo don Mauricio Mora, en las reuniones que se realizaron en las comunas de Cobquecura y San Fabián. Según relatan, en esas ocasiones el señor Mora les explicaba los trámites e incluso les mostró planos, mencionando la mayoría que la construcción de sus viviendas la realizó la constructora de nombre Toscana, cuyos representantes habrían estado al menos en una ocasión en compañía del señor Mora Barrera. Algunos mencionan que durante el proceso tomaron contacto con personas de la constructora Codillera, pero refieren que habría quebrado, una persona alude a la constructora Firenze.

A Diego Torres Placencia, se lo identifica por algunos de los deponentes como el encargado de la constructora Toscana que construyó las casas.

En cuanto a la participación del señor Oscar Crisóstomo Llanos, habiendo sido los deponentes consultados al respecto, la mayoría manifestó no conocerlo, algunos dicen saber quién es, pero que no intervino en el proceso vinculado a la postulación ni a la construcción de su vivienda. Dos personas relatan que habría asistido a alguna reunión, una de ellas no recuerda la participación que tuvo y otro dice que les indicó cómo era la postulación.

Finalmente, debe consignarse que todos los beneficiarios entrevistados por los funcionarios de la Policía de Investigaciones afirmaron que nunca se les solicitó dinero durante el proceso de postulación y construcción de sus viviendas, aportando solo lo que correspondía a su libreta de ahorro. Además, a la época de su declaración -año 2021- expresan que sus casas están siendo construidas o terminadas y en espera de la documentación correspondiente. La situación del señor Matamala se encontraba pendiente por dificultades con trámites de índole familiar que inciden en el estudio de títulos.



Décimo Octavo: Que, de los documentos allegados por el representante del señor Gobernador, aparece que en Resolución Exenta N°1431 de 13 de agosto de 2024, don Antonio Marchant Mass, Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Ñuble, consigna que mediante el Oficio Ord. N°423 del SERVIU Ñuble, ingresado a esa Secretaría con fecha 10.05.2021, se tomó conocimiento de denuncia anónima, presentada en sus dependencias, en contra de las Entidades Patrocinantes Acoge Asesorías y Consultorías Ltda., Inmobiliaria Pullay Ltda. y Constructora y Asistencia Técnica La Toscana Ltda., así como también de la Constructora Firenze Ltda., señalando que los antecedentes contenidos en dicha denuncia “dan cuenta de hechos que pueden constituir incumplimientos al Convenio Regional de Asistencia Técnica (CRAT) vigente a la época de postulación y presentación de proyectos asociados a los beneficiarios.

Mas adelante indica, que según informe final del procedimiento administrativo, no se ha logrado determinar, a la luz de los antecedentes incorporados en el proceso, que las Entidades Patrocinantes “Constructora y Asistencia Técnica La Toscana Ltda.”; “Acoge Asesorías y Consultorías Ltda.” e Inmobiliaria Pullay Ltda.”, infringieran las obligaciones al Convenio Regional de Asistencia Técnica (CRAT) y considerando que la administración, no pretende dilatar por más tiempo, un procedimiento que ha sido complejo, dado las circunstancias y la época en que fue iniciado, debido a la alerta sanitaria de COVID 19, y sus posteriores consecuencias, que aumentaron la carga laboral del equipo y principalmente del instructor designado, sumado el hecho que a finales del primer semestre y principios del segundo semestre del año 2023, se declaró zona de catástrofe, debido a sistema frontal, que ocasionó inundaciones, que afectaron a familias vulnerables de la región de Ñuble, las cuales debieron ser atendidas en forma prioritaria y urgente por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y sus respectivas Secretarías Regionales, lo cual aumentó la sobrecarga de labores de los funcionarios, por lo que se estima procedente, poner término al procedimiento administrativo sancionatorio, por decaimiento del acto administrativo, dado la pérdida de su eficacia y finalidad.

Finalmente resuelve :“1°**TERMÍNASE** el procedimiento administrativo sancionatorio respecto de las Entidades Patrocinantes Constructora y Asistencia Técnica La Toscana Ltda.; Acoge Asesorías y Consultorías Ltda. e Inmobiliaria Pullay Ltda.”, iniciado por Resolución Exenta N° 241, de fecha 22.07.2021, de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Ñuble, por decaimiento del procedimiento administrativo sancionatorio, dado la pérdida de su eficacia y finalidad. 2° **NOTIFÍQUESE** por carta certificada la presente resolución a las Entidad Desarrolladora ya referida, sin perjuicio de remitir a los correos



electrónicos registrados en el procedimiento, la cual dispondrá del plazo de cinco días hábiles para interponer los recursos que se señalan en el artículo 59 de la Ley N° 19.880.”

Por otra parte, con la copia de escritura de modificación de Sociedad Inmobiliaria Pullay Limitada, de 8 de febrero de 2021, se acredita que con esa fecha el señor Oscar Crisóstomo Llanos se retiró de la sociedad, incorporándose como socio don Rodrigo Adolfo Carrasco Carrasco, correspondiendo la administración de la Sociedad y el uso de su razón social indistintamente a él o la señora Carol Andrea Uribe González.

Décimo Noveno: Que, en base al contexto fáctico, normativo y doctrinario desarrollado en los basamentos precedentes, estos sentenciadores concluyen que los antecedentes invocados por el Ministerio Público recabados en la investigación iniciada en el mes de mayo de 2021, no satisfacen el estándar de convicción que exige el artículo 140 del Código Procesal, tanto en lo concerniente a la existencia del delito previsto y sancionado en el artículo 287 bis del Código Penal, como en lo relativo a la participación que como autor se le atribuye en tal ilícito al actual Gobernador Regional.

Tal conclusión se sostiene en que, por una parte, no existe mérito probatorio para atribuir al señor Crisóstomo Llanos, la calidad de empleado o mandatario que el tipo penal exige en el sujeto activo, ni tampoco puede tenerse por justificado que el pago pactado por los servicios prestados a la Entidad de Gestión Rural Acoge Asesorías y Consultorías Ltda., y a la constructora Firenze Limitada, pueda calificarse como una solicitud o aceptación dolosa de un beneficio económico para favorecer en el ejercicio de sus labores la contratación de un oferente por sobre otro.

En relación a la conducta atribuida, debe mencionarse que, si bien el persecutor asevera que el señor Crisóstomo Llanos *“favoreció la contratación de la empresa Constructora Firenze Ltda., en desmedro de otros potenciales oferentes, para ejecutar las obras de construcción de las viviendas”*, lo cierto es que no se logran esclarecer los actos positivos ejecutados por aquel tendientes a obtener dicho favorecimiento, ya que por una parte la sola suscripción del contrato de Inmobiliaria Pullay Limitada con constructora Firenze Limitada, no satisface la exigencia legal, y por otro, no se justifica que él haya tenido un rol activo de vinculación directa con los beneficiarios de los subsidios, quienes mayormente declaran no conocerlo, mencionando en cambio como encargados y gestores de todo el proceso, a las personas que se desempeñaban en la EGR Acoge, identificando a don Mauricio Mora, como quien les entregó los detalles de la



construcción y de la empresa encargada de ello, refiriéndose constantemente los beneficiarios a ésta como “Toscana”.

Sobre la afectación del bien jurídico protegido, esto es, la competencia leal, conviene precisar que, según lo postulado por el persecutor, en el caso en análisis tendrían la calidad de potenciales oferentes otras empresas constructoras, mencionando a una de nombre Cordillera y otra denominada Alturas, respecto de las cuales, no se aportan antecedentes idóneos para acreditar, en la época relevante para el tipo penal en análisis, tanto su existencia como la calificación exigida por la norma técnica sectorial, asilándose -según se dijo en estrados- en lo expresado el año 2021 y 2022 por Mauricio Mora y Roly Figueroa en su declaraciones policiales, alusión de suyo insuficiente, si se trata de justificar la existencia de un delito complejo como lo es el que genera la solicitud formulada a esta Corte, ello por cuanto su configuración impone sostener elementos que permitan radicar el examen de los hechos en sede penal, diferenciándolo de aquellas conductas relativas a la competencia que el legislador ha entregado a normas regulatorias civiles y comerciales.

Además, no puede soslayarse que en el caso en análisis, no cualquier empresa constructora estaba en condiciones de ser escogida para suscribir el contrato de construcción de las viviendas del programa de habitabilidad que benefició a las 17 personas mencionadas en los acápites previos, ello por cuanto, según la normativa técnica, el contratista o constructor debía contar con inscripción vigente para la Región de Ñuble en el Registro Nacional de Constructores de Viviendas Sociales, Modalidad Privada, o en el Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, regulados por el DS N° 63 (V. y U.), de 1997, y por el DS N° 127 (V. y U.), de 1977, ambos de Vivienda y Urbanismo, requisito que debía ser oportunamente verificado por el SERVIU directamente en el Registro respectivo.

De lo que se viene diciendo, fluye que si bien el tipo penal no exige la identificación de un oferente concreto, si requiere que se configure una distorsión en la contratación de una empresa en vez de otra, para lo cual no puede perderse de vista que en los contratos de construcción regulados por el Decreto N°10 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que Reglamenta el Programa de Habitabilidad Rural, únicamente están en condiciones de competir, aquellas que cumplan ciertos requisitos normativos, lo que impone aun en esta etapa procesal primigenia, contar con antecedentes que permitan justificar que los 17 contratos de construcción de viviendas que suscribió Constructora Firenze con las personas beneficiarias de subsidio habitacional -convención a la cual además compareció



don Mauricio Mora como representante de la Entidad de Gestión Rural Acoge Asesorías y Consultorías Ltda., lo fueron condicionados por el actuar doloso del señor Crisóstomo Llanos, aseveración que no encuentra adecuado sustento en los antecedentes hechos valer en estrados.

Vigésimo: Que, lo expuesto y razonado conduce a concluir que no existe mérito suficiente para acceder a la petición de desafuero, pues los antecedentes presentados por el Ministerio Público no resultan bastantes ni idóneos para justificar la existencia del delito previsto y sancionado en el artículo 287 bis del Código Penal, ni la participación que en él se atribuye al actual Gobernador de la Región de Ñuble.

Vigésimo Primero: Que, en atención a lo concluido en el motivo precedente, resulta inoficioso analizar el resto de las alegaciones formuladas por el abogado señor Enrique Aldunate Esquivel.

En razón de lo expuesto, y lo dispuesto en el artículo 124 de la Constitución Política de la República, artículos 416 y 423 del Código Procesal Penal y artículo 287 bis del Código Penal, se decide que, **se rechaza, sin costas**, la solicitud de desafuero presentada por el Ministerio Público representado por don Sergio Pérez Nova, Fiscal Jefe de la Fiscalía Local de Chillán, en contra del Gobernador Regional de Ñuble don Oscar Manuel Crisóstomo Llanos.

Redacción de la Ministra Paulina Gallardo García.

Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N°777-2024.-PENAL.





Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CCZBXQVNKEN

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Chillan integrada por Ministro Presidente Guillermo Alamiro Arcos S., Los Ministros (As) Paulina Gallardo G., Erica Livia Pezoa G. y Ministra Suplente Berta Roxana Salgado S. Chillan, quince de octubre de dos mil veinticuatro.

En Chillan, a quince de octubre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CCZBXQVNKEN